

Seminario – Taller
GÉNERO, MUJERES: REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN

Alternativas de reparación a mujeres víctimas al tiempo que se produce la desmovilización¹

Luz Piedad Caicedo
Corporación Humanas
Junio 2006

Puntos de partida

Primero, un proceso de paz pone en la arena social a actores que manifiestan la voluntad de modificar la interacción que hasta el momento tenían con la sociedad, caracterizada por el uso de la violencia, por una en la que se acepta la política como la esfera en la que los intereses de estos actores se disputan con los de los “otros” de acuerdo con los parámetros establecidos por el sistema universal de derechos humanos.

Segundo, la desmovilización es un proceso que contempla la reconversión de una estructura de corte militar hacia una de carácter civil, que debería, consecuentemente con el móvil que produjo el uso de la violencia², estar orientada hacia la participación política³.

Tercero, la desmovilización es uno de los procesos necesarios al interior del más amplio proceso de paz. Pero su realización no significa que se allana el camino hacia la paz. Al interior del proceso de paz, la desmovilización es la encargada de demarcar el antes y el después, y por tanto tiene un fuerte valor simbólico, no sólo para la sociedad en su conjunto sino para quienes se encuentran en el proceso de reintegración a la vida civil. Por esta razón la desmovilización puede asimilarse a un rito de pasaje y como tal tiene que tener la capacidad de generar una identidad y una pertenencia nuevas acordes con el parámetro aceptado en el origen del proceso: el sistema universal de derechos humanos.

Las tres premisas hacen referencia a la “transformación” que debe darse con motivo de la aceptación de las partes de abandonar la confrontación mediante el uso de la violencia. La desmovilización, por ser la que demarca el cambio, debe prever cómo va a articularse con los otros procesos. Desde el punto de vista de quienes se reintegran: debe preverse cómo se va a articular

¹ Esta ponencia tiene como base el trabajo de investigación que hice en la Corporación Humanas en el 2005 con el auspicio de UNIFEM y que fue publicado en medio electrónico bajo el título: “Riesgos para la seguridad de las mujeres en procesos de reinserción de excombatientes: Estudio sobre el impacto de la reinserción paramilitar en la vida y seguridad de las mujeres en los municipios de Montería y Tierralta, departamento de Córdoba.”

² El hecho de que distintos ejércitos armados se hayan autodenominado como autodefensas dando nacimiento a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con las que el gobierno está negociando genera una distorsión del fenómeno armado que representan. La distorsión está relacionada con la heterogeneidad de esa representación. Heterogeneidad que va más allá a la común que cualquier instancia de poder tiene en su seno: está relacionada, para simplificarlo, con las distintas relaciones que tienen con el negocio de las drogas, con la separación del accionar defensivo hacia el de aniquilación política y “consolidación militar, previas al dominio territorial de un área” siguiendo con la interpretación propuesta por Romero. Romero Mauricio (2003), **Paramilitares y autodefensas 1982 - 2003**, Bogotá, IEPRI y Planeta, 2005; pág. 38.

³ No sobra señalar que las críticas más fuertes al proceso de desmovilización fueron entorno a que la estructura paramilitar seguía intacta.

desmovilización con reintegración de excombatientes. Desde el punto de vista de la sociedad: cómo se va a articular desmovilización con verdad, justicia y reparación.

La cuarta premisa tiene que ver con el contexto específico desde el cual se realiza esta reflexión: la desmovilización de miembros de los grupos paramilitares. Las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia plantean como razón de la desmovilización la existencia de un Estado capaz de garantizar la seguridad de quienes se vieron obligados a organizarse para protegerse del accionar guerrillero y capaz de derrotar a la guerrilla. Mientras no existió un orden institucional que pudiese controlar los desmanes de la guerrilla contra “la gente de bien” los grupos de autodefensa protegieron sus intereses y brindaron seguridad donde no la había. Al momento de la desmovilización las AUC, según medios de comunicación como Semana, mostraban un nivel alto de consolidación. La negociación se hacía entonces con un actor con un importante acumulado de poder traducido en zonas controladas, negocios ilícitos, infiltración en el sector de la salud y una representación política del 30% en el Senado y el reclamo de heroísmo y servicio a la patria.

En suma, la reflexión se hace sobre la base de un grupo con un acumulado de poder muy alto que entra en un proceso de negociación buscando preservar ese acumulado (económico y político) logrado en el fragor de la confrontación violenta y reconvertirlo en acumulado bien habido. En el proceso de negociación, los paramilitares buscan la mayor reconversión con el menor precio posible.

La quinta premisa hace alusión a las características de los miembros de los grupos paramilitares. Una gran heterogeneidad en los orígenes de los distintos grupos que se traduce en una amplia gama de cabecillas que entran y salen del escenario público, una creciente captación de individuos susceptibles de ser presentados como paramilitares (en el momento de la desmovilización se calculaba un total de 20.000 personas en las filas del paramilitarismo, en tres años el número de personas desmovilizadas de estas organizaciones llegó a un poco más de 30.000), una muy escasa redistribución del poder acumulado entre los distintos miembros de las filas, una bajísima ideologización de sus cuadros y un accionar que utilizó de manera sistemática el terror para alcanzar las metas deseadas.

En los siguientes apartados se exponen aspectos de transformación que deberían formar parte de las políticas de desmovilización para propiciar (articular) la reparación de mujeres víctimas de los actores en uso de la fuerza que incursionan en el proceso de paz en el contexto particular que se delineó en las dos últimas premisas. Se plantea que estas políticas tienen la tarea de lograr un equilibrio de poderes: el altísimo poder acumulado por los miembros del paramilitarismo (que intentarán preservar al máximo en el transcurso del proceso de paz) y el casi inexistente poder de las víctimas mujeres.

La séptima y última premisa plantea una primera reparación en cabeza del Estado como responsable primero en la propiciación de la opción paramilitar y diseñador y ejecutor de la política de desmovilización. En este sentido esta reflexión solo apunta a determinar algunas posibilidades de reparación promovidas por el Estado y articuladas a la desmovilización.

Para ello se abordan tres dimensiones que se derivan de las premisas presentadas: 1) la transformación en la historia de la interacción que se generó entre paramilitares y sociedad civil; 2) la construcción de un espacio de interacción política y 3) la transformación de un sujeto en uso de la fuerza dispuesto a ganar siempre hacia la de un sujeto en uso de la argumentación

preparado para eventualmente perder.

La historia de las interacciones de los paramilitares con la sociedad

Dos son los elementos que se deben tener en consideración para analizar la historia de las interacciones de los paramilitares con la sociedad. La primera está relacionada con los móviles que dan sustento a la opción violenta y, por tanto, que facilitan que distintas personas se agrupen para cambiar lo que consideran inadecuado y se organicen bajo estructuras militaristas para enfrentarse mediante el uso de la violencia con los causantes (la guerrilla) de lo que se califica como inadecuado (extorsión, secuestro y asesinato). En este terreno estamos frente a una historia protagonizada por enemigos auto-identificados como tales cada uno de ellos con aliados (simpatizantes, colaboradores, financiadores), también auto-identificados como tales pero no fácilmente identificables para el opositor.

La segunda está relacionada con la dinámica propia de la confrontación. Quién gana y quién pierde está determinado por el copamiento de posiciones (que se traduce en dominio territorial) y la clasificación de todos y todas en amigos y enemigos. La clasificación se inicia con la ampliación del calificativo de enemigo hacia sectores que se consideran afines con él. Para los paramilitares son aliados de la guerrilla la izquierda, la gente organizada en busca de reivindicaciones socio-económicas, los y las defensoras de derechos humanos. En la medida en que se va produciendo la avanzada de los actores armados en una región, la sociedad civil (por fuera de los sindicatos como aliados) va perdiendo también la posibilidad de abstraerse de esa clasificación bipolar, convirtiéndose en población conquistada. En este terreno estamos, a diferencia del anterior, ante población estigmatizada como enemiga y cooptada como aliada.

La desmovilización se realiza después de que el territorio nacional ha sido estratégicamente compartimentado y sus pobladores han sido clasificados como enemigos o aliados (aún cuando en la práctica lo que se encuentra son tanto aliados, como enemigos, estigmatizados y cooptados). La desmovilización también se realiza en un momento concreto de realización del copamiento territorial fruto de la compartimentalización estratégica⁴. Ello lleva a pensar que la desmovilización tiene que tener en consideración esa historia de copamiento territorial y de clasificación de la población. Hacia dónde se dirige para reintegrarse la persona desmovilizada tiene un impacto en la población. Lo tiene también la capacidad de coerción que el paramilitarismo alcanzó a tener en las zonas donde se encuentran las víctimas que deben ser reparadas.

En Tierralta y Montería, los dos municipios en los que se sondeó el impacto de la desmovilización en la vida de las mujeres, lo que se observa es una historia de larga interacción con actores armados opuestos que tuvieron disputas del territorio hasta que uno de ellos, las AUC, logró el control casi total. Ello significó para las mujeres diversas realidades:

- La de víctimas de las medidas de fuerza utilizadas para controlar el territorio y cooptar la población (violencia sexual, asesinato, desaparición, tortura, amenaza);
- La de víctimas de desplazamiento (ya sea por acción del paramilitarismo o la guerrilla);
- La de parientes de los actores armados de cualquiera de las dos vertientes, pero con una

⁴ Las partes en confrontación están en capacidad aún de completar el proyecto de copamiento territorial después de iniciado el proceso de paz de acuerdo con el poder con que entraron a él.

- preeminencia de parientes vinculados a las filas de las AUC;
- La de perseguidas políticas por su actividad política, social y/o comunitaria.

Mientras esa es la diversidad en las realidades de las víctimas, la realidad de las personas desmovilizadas está dada por:

- Un alto poder económico gracias a la concentración de tierras y acumulación de capital, en cabeza de muy pocos mandos, fruto de la expropiación de pequeños campesinos y de actividades comerciales (lícitas o ilícitas);
- Un alto poder simbólico de las personas desmovilizadas relacionado con el recuerdo de la capacidad de ejercer la violencia;
- Un alto poder simbólico de los rasos desmovilizados fincado en la exaltación de lo masculino como fuerza y dominio;
- Una bajísima ideologización y conocimientos prácticos que dificultan una articulación con sentido a la vida civil.

La pregunta entonces es qué políticas de reparación posibilitan un equilibrio de poderes, o mejor, un enrutamiento hacia un equilibrio de poderes entre mujeres víctimas y personas desmovilizadas.

Consideramos que en este contexto es clave, como se mencionó al inicio, reconocer la responsabilidad del Estado en la conformación de la opción paramilitar; la precaria realización de derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría de la población colombiana y la enorme concentración de la tierra en muy pocas manos.

Dos podrían ser las rutas para empezar a equilibrar la enorme desigualdad y bajo la responsabilidad y recursos estatales: titulación de tierras a mujeres cabeza de familia desplazadas de las áreas rurales aptas para la producción agropecuaria y entrega de capital, capacitación y asesoría técnica suficiente para emprender una empresa agrícola. Vinculación de excombatientes en la adecuación de saneamiento básico para los barrios marginales de los municipios receptores (a diferencia de la entrega de dinero por el solo hecho de desmovilizarse). Ambas acciones, de carácter material, requieren la selección de las personas beneficiadas (en el entendido de que se está frente a recursos escasos del Estado) lo que demanda criterios de elegibilidad con fuerte carácter simbólico: grupos de mujeres que simbolizan un tipo de víctima; barrios que sintetizan la complejidad del conflicto armado.

La construcción de un espacio de interacción política

Tal vez uno de los aspectos más polémicos y que mayor preocupación - indignación ha generado entre los sectores críticos del proceso de negociación con los paramilitares tiene que ver con las posibles (y en algunos de ellos claras) aspiraciones políticas de sus integrantes. Complejo tema sobre el que me parece pertinente poner a consideración algunas de las preocupaciones y realidades manifestadas por mujeres de Montería y Tierralta.

Las organizaciones populares y las organizaciones de mujeres aprendieron a trabajar en medio de la estigmatización, dejaron por fuera reivindicaciones explícitas en torno a sus derechos económicos, sociales y culturales y aplazaron peticiones para garantizar el goce pleno de sus derechos. Muchas de ellas emprendieron un trabajo de resistencia frente a la adversidad. Con la

desmovilización aparece en la escena social un nuevo actor que tiene todavía capacidad de coerción (por el ejercicio pasado de la violencia, por la poca credibilidad dada al desarme de los paramilitares) y que está insertándose en las organizaciones de base y comunitarias; muchas de ellas tienen como protagonistas a mujeres o a jóvenes de ambos sexos.

La presencia de este nuevo actor (en términos del contexto generado por la desmovilización) y su capacidad de inserción significa para las mujeres un redoblamiento del miedo y del aplazamiento de sus reivindicaciones. La desmovilización no se ha traducido para las mujeres en la pérdida del estigma de subversivas. En el mejor de los casos, sus reivindicaciones como víctimas son leídas como obstáculos para el proceso de paz, aspiraciones desmedidas y desconsideradas (búsqueda del baloto en los bienes de los desmovilizados como dijera hace poco uno de los líderes paramilitares).

Cuánto de esa participación está lograda gracias a la amenaza o el uso efectivo de la fuerza, cuánta esta posibilitada por el poder económico y la capacidad de poner recursos para el funcionamiento operativo de la organización y la financiación de los proyectos planeados. No tenemos capacidad de responder, pero sin duda es uno de los aspectos en torno a los cuales es necesaria la búsqueda del equilibrio.

La reconversión del accionar paramilitar en accionar político, más que una aspiración de unos pocos desmovilizados debe ser una búsqueda del proceso de desmovilización. No sobra decir que siempre y cuando no se mantenga o se reactive la capacidad coercitiva sustentada en la violencia y/o el terror. Cómo canalizar los intereses de la nueva elite desmovilizada a través de partidos o movimientos sin que ello signifique sofocar las pocas opciones políticas y organizativas que sobrevivieron a la estigmatización de que fueron víctimas por parte de ellos mismos.

Una ruta hacia el equilibrio tiene que ver con revitalizar, incentivar, apoyar la asociación en grupos de reivindicación social, la conformación de organizaciones sindicales (que por supuesto implica una revisión de la política laboral), campesinas y comunitarias con expresiones mixtas que garanticen el protagonismo femenino y con expresiones que reivindicuen y gestionen únicamente los intereses de las mujeres.

El proceso de negociación con los paramilitares debe dar lugar a la búsqueda de alternativas con la comunidad organizada en torno a la condición de víctima, de comunidad receptora de excombatientes. Los bajos niveles de participación del actual proceso de negociación antes que ayudar a la búsqueda de equilibrio ha significado una mayor concentración; la apertura a la participación en las siguientes fases es fundamental y se constituye en una forma de reparar la debacle sufrida por las organizaciones populares fruto de la estigmatización de que fueron víctimas.

La desmovilización: un rito de pasaje (dimensión individual)

El rito de pasaje tiene la cualidad de demarcar la transformación de un individuo en el seno de un grupo social. Todas las personas que asisten a ese rito saben quien se va a transformar y en qué se va a convertir. En muchas ocasiones el mismo rito de pasaje significa una experiencia vital que marca a la persona de tal forma que el tránsito hacia la nueva condición se ha dado cuando el rito finaliza; en otras, será necesario, para sostener en el tiempo el cambio, todo el andamiaje de

instituciones que receptan y encausan a la nueva persona, la transformada en ese nuevo ser que se busca lograr.

Con la desmovilización estamos frente a un rito de pasaje de muy bajo impacto experiencial, con poca capacidad de producir transformaciones en quien durante su enrolamiento militar vivió episodios que lo adscribieron dramáticamente a su condición de combatiente y en muchos casos de generador de terror para lo que incurrió en actos prohibidos culturalmente. La pertenencia a una opción militarista exacerba las expresiones de masculinidad que recurren a la fuerza para ser varón. El desmonte de esta vivencia impresa con sangre (la propia, la del compañero de armas, la de su familia, la de su comunidad, la del enemigo) difícilmente se alcanza con el módulo cero de capacitación. Sumado a ello el andamiaje de instituciones se muestra incompleto sin un plan después del tiempo previsto para la entrega de la ayuda humanitaria consistente en dinero en efectivo por 18 meses⁵. El andamiaje que empujó hacia las filas paramilitares es el mismo que lo recepta para convencerlo (ahora sí cuando no lo logró antes) que la civilidad es la opción. Estamos entonces frente a un sujeto que se sabe sobreviviente, que realizó actos prohibidos y que no se sabe/reconoce varón sino desde el uso de la fuerza y la sumisión del otro y sobre todo de las mujeres.

La desmovilización no sólo debe ser un rito de pasaje para el excombatiente, en la propuesta de búsqueda de una ruta que equilibre la enorme desigualdad de poderes, esa misma desmovilización debe permitir el tránsito de las víctimas mujeres hacia mujeres sujetos de derechos.

El escenario no es menos complejo que los anteriores analizados. Lo que se puede observar en las zonas de desmovilizados es la perpetuación de la mujer víctima: por violencia física, verbal y sexual por parte de su pariente desmovilizado; por su perpetuación como objeto sexual al incentivar la trata de mujeres (niñas y adultas).

La mayoría de excombatientes, además, forman parte de quienes no acumularon poder debida a la baja redistribución del mismo. Su poder era la pertenencia al grupo, el uso desmedido de la fuerza, la generación del terror y su arma. La desmovilización no le ofrece sino la pérdida de todos estos garantes de su posición de superioridad. Durante 18 meses se le garantiza un poder económico que detentan muy pocos varones de la zona lo que compensa de alguna manera la pérdida sufrida con la desmovilización. Pero después de ello volverá a ser uno más del montón.

Paradójicamente lo que se requiere es otorgarle poder tanto a quienes se desmovilizaron como a sus víctimas. Pero se trata de poderes distintos a los que el combatiente tenía antes y uno que tal vez nunca ha gozado la víctima mujer.

Sin lugar a dudas la idea del varón heroico no sólo está asociada con el sobreviviente sino con el salvador y no estaría de más empezar a ligarla con una femenina: la del cuidado. Tal vez una de las posibilidades de adquirir poder para el desmovilizado descargada de la idea del macho dominante

⁵ De acuerdo con información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el proceso de desmovilización consta de 3 fases: la de sensibilización -8 días-, la de concentración y desmovilización -10 días-, la de inicio del proceso de reincorporación -3 días-, después de estas 3 primeras fases se desarrolla el proceso de reincorporación que tiene una duración de 18 meses. El modelo, dice la nota a pie de la dispositiva, está construido para 500 hombres. Información disponible en Internet en la página del Alto Comisionado para la Paz: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co>.

sea una propuesta formulada por Natalia Springer⁶: vincular a los excombatientes a actividades de desactivación de minas antipersona, erradicación manual de cultivos de hoja de coca, cultivo y cuidado de especies en vía de extinción a cambio del dinero recibido por el sólo hecho de desmovilizarse.

La posibilidad de transformación de víctima a sujeto de derechos está dada por el reconocimiento de haber sido víctima y como lo plantea Kjell-Åke Nordquist por la posibilidad de determinar la forma como se relacionan con el victimario⁷. Sin lugar a dudas también la imposibilidad de generación de los propios recursos para las mujeres víctimas se constituye en una doble vulneración, su dependencia probable a un nuevo victimario, la imposibilidad de ganar autonomía y autodeterminación. Una posibilidad de reparación a cargo del Estado es la de garantizar a mujeres víctimas la autogeneración de recursos a partir de la producción de bienes comercializables estratégicos.

⁶ Springer, Natalia, **Desactivar la guerra: Alternativas audaces para consolidar la paz**, Aguilar, Bogotá, 2005.

⁷ Nordquist, Kjell-Åke, “La reconciliación como concepto político: Algunas observaciones y comentarios”.